



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, ECOTURISTICO Y  
BIODIVERSO DE BUENAVENTURA  
NIT. 890.399.045-3

1068

Doctor  
**HUGO HUMBERTO SAA VALENCIA**  
Juez Tercero Administrativo del Círculo de Buenaventura  
E.S.D.

JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO  
ORAL DEL DISTRITO  
BUENAVENTURA - VALLE  
**RECIBIDO**  
FECHA: 17 FEB 2020  
FOLIOS: 6  
HORA: 4:33 PM  
FIRMA: [Signature]

<b>RAD:</b>	2012 - 00181
<b>MEDIO DE CONTROL:</b>	ACCION DE REPARACION DIRECTA
<b>DEMANDANTE:</b>	GRACIELA VICTORIA CARDENAS
<b>DEMANDADO:</b>	NACION -MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
<b>VINCULADOS:</b>	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DISTRITO DE BUENAVENTURA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE FUNDACION VALLE DEL LILI
<b>LLAMADO EN GARANTIA:</b>	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
<b>LLAMANTE:</b>	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
<b>LLAMADO EN GARANTIA:</b>	ALLIANZ SEGUROS S.A.
<b>LLAMANTE:</b>	FUNDACION VALLE DEL LILI
<b>LLAMADO EN GARANTIA:</b>	ALLIANZ SEGUROS S.A.

**DIANA PATRICIA CAICEDO VALENCIA**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No.29.177.505 expedida en Cali -Valle, abogada titulada y en ejercicio, con tarjeta profesional No.139.601 del C. S. de la J, en mi condición de apoderada judicial del distrito de buenaventura, según poder otorgado por el Dr. VICTOR HUGO VIDAL PIEDRAHITA, en su calidad de Alcalde Distrital de Buenaventura, debidamente posesionado según Acta de Posesión No. 01 del 01 de enero de 2020, emanado por la Notaría Segunda del Circulo de Buenaventura, dentro del referido proceso, y estando en término legal, respetuosamente, expongo ante su Señoría las siguientes consideraciones, para que obren como alegatos de conclusión, que le permitan tener mayor claridad y fundamentos legales para el fallo que haya de emitir y que espero sea favorable a los intereses que aquí defiendo, estos son:

### Presupuestos de la Responsabilidad Extracontractual del Estado

En relación con la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su constitucionalización erigiéndola como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación e interés. Como bien se sostiene en la doctrina, "La responsabilidad de la Administración, en cambio, se articula como una garantía de los ciudadanos, pero no como una potestad; los daños cubiertos por la responsabilidad administrativa no son deliberadamente causados por la Administración por exigencia del interés general, no aparecen como un medio necesario para la consecución del fin público"





Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, este concepto tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública tanto por la acción, como por la omisión, bien sea bajo los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional u otro.

En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico). Conforme a lo cual se analizará el caso a resolver.

### **Daño antijurídico**

El daño antijurídico comprendido, desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual y del Estado impone considerar aquello que derivado de la actividad o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea "irrazonable", en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos.

En cuanto al daño antijurídico, el precedente jurisprudencial constitucional señala que la:

*"(...) antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima"*<sup>1</sup>.

Así pues, la jurisprudencia constitucional ha señalado:

*"(...) que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración"*.

De igual manera, la jurisprudencia constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los "principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución"

Debe quedar claro que es un concepto constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un "Estado Social de Derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos". Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable, anormal y que se trate de una situación jurídicamente protegida.

---

responsabilidad civil extracontractual requiera un elemento de antijuricidad (sic)". PANTALEÓN, Fernando. "Cómo repensar.





Al respecto, se itera, no son soportables las secuelas que pudieran padecer los demandantes, ya que no comprenden una carga u obligación general impuesta por la ley a los ciudadanos, ni encuadran en una actuación "discrecional de la Administración que se ejerce en términos razonables y proporcionados; y, tampoco, puede tratarse de una carga soportable teniendo en cuenta que la lesión no es producto de un riesgo normal "derivado de la relación con un servicio público"

Sin embargo, como se ha dicho, no es suficiente constatar la existencia del daño antijurídico, sino que es necesario realizar el correspondiente juicio de imputación, que permita determinar si cabe o no atribuirlo fáctica y jurídicamente a las entidades demandadas, si opera alguna de las causales exonerativas de responsabilidad o se produce un evento de concurrencia de acciones u omisiones en la producción del daño.

### **La imputación de la responsabilidad y su fundamento**

Como se viene afirmando, la imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica<sup>2</sup>, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera con fundamento en los distintos criterios de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio -simple, presunta y probada-; daño especial -desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional). Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. Precisamente, en el precedente jurisprudencial constitucional se sostiene:

*"La superioridad jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los daños antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan entre los entes públicos y los administrados. La responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no sólo por la norma expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado según la cláusula social así lo exigen".*

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe cargarle al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica. Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las "estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas".

En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva que "parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones". Siendo esto así, la imputación objetiva implica la "atribución", lo que denota en lenguaje filosófico - jurídico una prescripción,





1021

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, ECOTURISTICO Y  
BIODIVERSO DE BUENAVENTURA  
NIT. 890.399.045-3

más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de "cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta".

Esto, sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de *"excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar"*.

Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no. Es más, se sostiene doctrinalmente "que la responsabilidad objetiva puede llegar a tener, en algunos casos, mayor eficacia preventiva que la responsabilidad por culpa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad objetiva, aunque no altere la diligencia adoptada en el ejercicio de la actividad (no afecte a la calidad de la actividad), sí incide en el nivel de la actividad (incide en la cantidad de actividad) del sujeto productor de daños, estimulando un menor volumen de actividad (el nivel óptimo) y, con ello, la causación de un número menor de daños".

Dicha tendencia es la que marcó el precedente jurisprudencial constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación<sup>3</sup> que el juez está llamado a aplicar, de tal manera que se aplique como máxima que: "Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro".

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional argumenta:

"... el núcleo de la imputación no gira en torno a la pregunta acerca de si el hecho era evitable o cognoscible. Primero hay que determinar **si el sujeto era competente** para desplegar los deberes de seguridad en el tráfico o de protección frente a determinados bienes jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era evitable y cognoscible. Ejemplo: **un desprevenido transeúnte encuentra súbitamente en la calle un herido en grave peligro (situación de peligro generante del deber) y no le presta ayuda (no realización de la acción esperada); posteriormente fallece por falta de una oportuna intervención médica que el peatón tenía posibilidad de facilitarle**





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, ECOTURISTICO Y  
BIODIVERSO DE BUENAVENTURA  
NIT. 890.399.045-3

1072

**trasladándolo a un hospital cercano (capacidad individual de acción). La muerte no le es imputable a pesar de la evitabilidad y el conocimiento. En efecto, si no tiene una posición de garante porque él no ha creado el riesgo para los bienes jurídicos, ni tampoco tiene una obligación institucional de donde surja un deber concreto de evitar el resultado mediante una acción de salvamento, el resultado no le es atribuible. Responde sólo por la omisión de socorro y el fundamento de esa responsabilidad es quebrantar el deber de solidaridad que tiene todo ciudadano.**

RESPONSABILIDAD MÉDICA-Se demostró que la entidad le brindó el tratamiento requerido a la paciente considerando que para ese momento ya contaba con una enfermedad de base avanzada denominada (VIH), compleja por la tuberculosis y toxoplasmosis las cuales se logra evidenciar en la historia clínica fue debidamente tratada hasta el momento de su egreso en condiciones estables medicamente, lo cual deja sin efecto la RESPONSABILIDAD MÉDICA-Inexistencia de nexo causal.

En el presente asunto considera esta apoderada, que en el caso concreto, a pesar de hallarse demostrado el daño sufrido por los demandantes, no habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Distrito de Buenaventura, porque no se demostró que ese daño se hubiera producido como consecuencia de fallas del servicio de la Administración Distrital, en razón de que no era el Distrito de Buenaventura a quien le correspondía prestare el servicio asistencial que la fallecida requería para la enfermedad que padecía.

A mi saber entender la administración distrital en cabeza de la secretaria de salud le vinculo a la paciente al sistema de seguridad social a través de la ARS – SELVASALUD, hoy liquidada E.P.S.S.S.A. En ese orden de ideas SELVA SALUD debió asumir el traslado de sus afiliados a otra EPS, con la cual se presume sostenía algún convenio administrativo; en aras de garantizar la continuidad en la prestación de servicios de sus beneficiarios.

ES así como dentro del expediente se encuentra demostrado que la fallecida señora DEYLUZ PRETEL VICTORIA, fue tratada de manera oportuna, aplicando el procedimiento adecuado para ese tipo enfermedades por parte de los profesionales de la medicina, y si bien con posterioridad al tratamiento recibido falleció, lo cierto es que ello no fue consecuencia directa de una circunstancia atribuible a la entidad distrital demandada.,

Es por ello que en virtud de lo expuesto, considero que resulta procedente solicitar la desvinculación del Distrito en el presente proceso o en su defecto, que se le exonere de responsabilidad alguna, toda vez que ninguna injerencia tuvo en el resultado trágico del fallecimiento de la señora DEYLUZ PRETEL VICTORIA, en razón que en el plenario no existen elementos probatorios o fácticos que demuestren la responsabilidad alguna de la Alcaldía Distrital en los actos materia de controversia en el presente asunto



1073



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, ECOTURISTICO Y  
BIODIVERSO DE BUENAVENTURA  
NIT. 890.399.045-3

Con fundamento en las anteriores consideraciones me permito presentar las siguientes:

**EXCEPCIONES**

**FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA:** Respecto al Distrito de Buenaventura la demanda se dirige contra entidad que no tiene capacidad por pasiva para responder por los hechos que se investigan, ni existe relación de responsabilidad entre las entidades demandadas.

**Falta de Responsabilidad del ente Demandado.** No existe relación de causalidad entre el hecho y la supuesta falla de la administración.

Del señor Juez,

Atentamente,

**DIANA PATRICIA CAICEDO VALENCIA**

CC. No. 29.177.505 de Cali

T.P. No. 139.601 del C. S. De la J.

